derivados de la antigüedad en el servicio para su antecesora.- Desde dicha perspectiva, no puede sostenerse válidamente que Dolores Gas S.A. incurrió en una irregularidad registral al no consignar en sus registros una fecha anterior a la que se produjo la adquisición del establecimiento, por lo que frente a ello y al no habersele desconocido a la Sra. F. su antigüedad a las órdenes de la sociedad transmitente, de prosperar mi voto, corresponde desestimar en este aspecto el recurso interpuesto.-

Distinta suerte ha de correr el agravio vertido en relación a la remuneración percibida por la accionante y ello por cuanto, del detenido y pormenorizado análisis de las testimoniales rendidas en la causa, cabe a mi juicio tener por acreditada la percepción de una porción del salario sin respaldo registral.-

El testigo A. a fs. 172 al respecto señaló que, los salarios se pagaban parcialmente "en negro", que se los documentaba a través de recibos "de librería", que era práctica habitual percibir adelantos en forma semanal o quincenal con vales que luego se documentaban al final del mes, que la actora recibía de la casa central los recibos oficiales y el ticket por el salario total, que de ese importe se restaban los adelantos abonados durante el mes y que el saldo se pagaba en efectivo. Asimismo, al ser preguntado por el modo en que tomó conocimiento de sus asertos, manifestó que cobraban varias personas juntas, que la actora tuvo a su cargo también el pago de los salarios y que vio toda la documentación referida y de la que surgiría la metodología adoptada por la empleadora para la liquidación de los haberes de su personal al tiempo de concurrir a percibir sus haberes.-

Lo expuesto por el testigo antes mencionado encuentra correlato en la declaración testimonial de S. a fs. 190, quien sostuvo que "la actora cobraba igual que todos los empleados. Que le abonaban semanalmente y le hacían firmar un papelito, que no era recibo ni nada, sino como un vale. Que primero le abonaban dicho pago semanalmente y luego lo cambiaron cada quince días y, a fin de mes, le hacían firmar un recibo que allí figuraba solamente el básico. Que luego percibían el pago en negro que no le daban recibos, ni nada... que la actora o Analía C. eran quienes le abonaban al testigo"

A su vez, el testigo Carlos E. S. a fs. 188 señaló que "la actora estaba en la administración... y a veces le abonaba al testigo y a todos los empleados. Que también podía abonarle la hija del capataz de nombre Analía. Que cobraban por semana o por quincena y al mes le daban el recibo, que sacaban vales a cuenta del sueldo. Que todos cobraban juntos y hacían cola para cobrar. Que no sabe lo que percibía la actora de dinero. Que vio que la actora firmaba los recibos junto con nosotros".-

A lo expuesto, el testigo S. a fs. 177 agregó que "a la actora le daban un vale el sábado, no sabe por qué importe, veía que ahí le pagaba el sueldo como le abonaban a todos. Que Analía le pagaba a la actora y al testigo. Que lo hacía en la oficina de González Catán, ubicada en el primer piso. Que ahí le daban un vale por la suma que no sabe cuánto era y que a fin de mes le daban el recibo de sueldo"

Si bien los testimonios de A. y S. fueron impugnados por la demandada a fs. 195 por cuanto ambos habrían iniciado demanda en su contra con anterioridad (procesos concluidos luego a través de los acuerdos conciliatorios invocados), tal circunstancia no impone restar toda eficacia probatoria a sus testimonios si, como ocurre en el caso, los mismos se encuentran debidamente fundados en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que manifestaran haber tomado conocimiento de los hechos y, a su vez, se encuentran corroborados a través de los concordantes y coincidentes dichos de los Testigos

S.

y

S.-

Contrariamente a lo señalado por la sentenciante de grado, no advierto la existencia de contradicciones o imprecisiones en las declaraciones antes referidas por cuanto el hecho

de que se instrumentaran de manera informal pagos semanales o quincenales no impide concluir que la suma consignada en los recibos legales emitidos con una frecuencia mensual resultó ser inferior a la realmente percibida por los trabajos realizados puesto que como lo explicita A., al efectuar la liquidación mensual se restaban los adelantos abonados de manera semana y quincenal del total del importe salarial y no exclusivamete del básico consignado en los recibos, determinándose así un saldo que no contaba con respaldo registral.- Al respecto, aún cuando no soslayo que la actora no ha descripto en la demanda la metodología empleada por la accionada para hacer efectivo el pago de salarios, lo cierto y jurídicamente relevante es que la empleadora no documentó adecuadamente los pagos parciales realizados con una periodicidad menor a la que emerge de los recibos (adelantos), por lo que si alguna duda cupiera en cuanto al importe total resultante de la sumatoria de la totalidad de las sumas abonadas, al haberse acreditado la irregularidad en el modo de hacer efectiva la liquidación de haberes, era a la demandada a quien le correspondía acreditar el cumplimiento de los recaudos formales que en resguardo de la integridad salarial imponen los arts. 130, 138, 139 y 140 de la LCT para así eximirse de las consecuencias propias de su obrar irregular.- Consecuentemente, por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 53, 56 y 142 de la LCT, de prosperar mi voto, corresponde hacer lugar a la crítica al respecto formulada por la parte actora y tener por acreditada la percepción de salarios sin respaldo registral a razón de un promedio de \$ 1.000 mensuales a la época de operarse el distracto.- También reclamó la actora el reconocimiento de las horas extras trabajadas. Pese al esfuerzo argumental desplegado por la quejosa, lo cierto es que los testigos dan cuenta de modo impreciso de un horario diverso al denunciado en el inicio (de 9 a 19, de 7 a 20 y/o de 9 a 20 hs., ver fs. 172, 177, 188 y 190); que al formular su intimación la actora no especificó debidamente la extensión de su jornada laboral (9 hs. diarias de lunes a viernes y hasta las 16 hs. los días sábado –ver fs. 14-) y que al indicar la extensión de su jornada a fs. 6 vta. de la demanda manifestó que prestó servicios de lunes a sábados de 9 a 13 y de 15 a 19 hs.- Desde la perspectiva expuesta, el cumplimiento de una jornada de 8 horas diarias de lunes a sábado, a lo sumo arroja un total semana de 48 hs., por lo que ninguna razón se advierte para acceder al reclamo por el cobro de horas extraordinarias en tanto no se ha demostrado que las horas trabajadas durante los días sábados lo hayan sido en exceso de la jornada máxima legal, por lo que al compartir el criterio con que se expidiera la sentenciante de grado de conformidad con la doctrina senada en el fallo plenario "D'Aloi c/Selsa", de prosperar mi voto, corresponde desestimar los agravios deducidos al respecto.- En atención a lo precedentemente expuesto y toda vez que al formular la intimación previa al distracto, la actora incluyó entre sus reclamos el reconocimiento de la real remuneración percibida (ver carta documento del 5/8/08 a fs. 14), corresponde hacer lugar al recurso interpuesto en cuanto cuestiona el rechazo de los rubros indemnizatorios derivados del despido indirecto en el que se colocara ante el desconocimiento de sus reales condiciones de contratación (ver misiva del 23/5/08 a fs. 17) puesto que, como lo expuse ut supra, en el presente, corresponde tener por acreditada la percepción de salarios sin respaldo registral. Consecuentemente, por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 62, 63, 242 y concordantes de la LCT, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto no ha hecho lugar a las indemnizaciones derivadas del despido, como así también en lo que hace al reclamo fundado en el art. 2 de la ley 25323 por cuanto la actora dio cumplimiento con la

intimación pertinente al tiempo de formalizar el despido e incluso la incluyó en su requerimiento ante el SECCLO (ver fs. 3).- Sobre la base de lo precedentemente expuesto, corresponde analizar el reclamo formulado con sustento en lo dispuesto en los arts. 10 y 15 de la LNE. Con respecto a la indemnización prevista en la primera de las normas citadas, la desestimación del reclamo se impone por cuanto no se ha alegado ni probado que, con relación a la remuneración abonada sin respaldo registral, la actora hubiere satisfecho el recaudo establecido en el inciso b) del art. 11 de la ley 24013 (conf. ley 25345) por lo que al no haberse cursado de manera oportuna la comunicación pertinente a la AFIP, no corresponde acceder a la pretensión deducida al respecto.- Distinta suerte ha de seguir la pretensión deducida con sustento en el art. 15 de la ley 24013 puesto que, tal como lo resolviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 31-5-05 en autos "Di Mauro, José S. C/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. y otro", el requisito introducido por la ley 25.345 en el art. 11 de la LNE atañe exclusivamente a las multas de los arts. 8 a 10 pero no a la duplicación indemnizatoria normada en aquel precepto. Por ende, en tanto se verificó la irregularidad registral denunciada a nivel salarial y la trabajadora efectuó durante la vigencia del contrato el emplazamiento para que tal irregularidad fuera rectificadas, cabe admitir el reclamo formulado al respecto.- Con relación a la sanción prevista en el art. 80 de la LCT el cuestionamiento formulado por la accionante, a mi juicio, deberá ser desestimado por cuanto no se ha sometido a la sentenciante de grado la cuestión que con base constitucional extemporáneamente se plantea en los agravios (conf. arts. 163 y 271 PCCN) y, aún cuando pudiera considerarse admisible su introducción en el litigio al momento de expresar agravios, lo cierto es que esta Sala ya se ha expedido (con criterio que comparto), en sentido desfavorable al pretendido por la reclamante.- En efecto, si bien es cierto que la demandada sólo habría intentado poner a disposición al contestar demanda las constancias de fs. 79/80 –cuyas firmas no lucen certificadas- y que ellas no satisfacen la totalidad de los recaudos de contenido previstos en el art. 80 LCT, no lo es menos que la demandante no dio cumplimiento a la intimación fehaciente prevista en el art. 3º del dec. 146/01, ni tampoco reclamó la entrega del certificado de trabajo en la instancia conciliatoria ante el SECCLO (ver fs. 3).- En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del decreto 146/01, la actora no efectuó en la causa ningún cuestionamiento de la mencionada norma legal que hubiera integrado los aspectos sometidos a debate, por lo que la pretensión se aparta de los lineamientos sobre los que se estructura el principio de congruencia que en resguardo del derecho de defensa, debe regir el proceso (conf. art. 18 CN y 34 inc. 4 CPCCN), por lo que su análisis debe efectuarse con suma prudencia.- En efecto, conforme lo señala Centeno (El procedimiento en la Provincia de Buenos Aires. pág. 94 y sgtes.), la demanda determina la apertura de la instancia, quedando fijados los límites de la acción y su naturaleza y a éstos se supeditarán la contestación de la demanda y la sentencia. De modo que, el juez no puede apartarse, en principio, de los términos en los que quedó trabada la litis (cfr. art. 34, inc. 4 CPCCN).- Sin embargo, cabe considerar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el pronunciarse en la causa "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" (el 27-11-12; R.401XLIII), afirmó la facultad que tienen los jueces de todas las instancias para declarar de oficio la inconstitucionalidad de cualquier disposición normativa cuya aplicación implique la afectación concreta de las garantías emanadas de la Constitución Nacional o de los Tratados de igual jerarquía; y remarcó el consiguiente deber de efectuar dicha declaración ante la comprobación efectiva en cada causa de una vulneración de tales garantías, aún cuando la interesada hubiera omitido

efectuar un planteo constitucional específico.- En esa misma causa, el Más Alto Tribunal explicitó también las circunstancias y condiciones en las cuales resultaría admisible una declaración de inconstitucionalidad ex officio; y, a su vez, estableció los límites procesales dentro de los cuales puede ser ejercida dicha facultad. Sostuvo la Corte Suprema que: "...Desde esta perspectiva, el contralor normativo a cargo del juez presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, las que fijan los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes. Es conveniente recordar, al respecto, que la descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria de los contendientes así como sus planteos argumentales los que debe poner de manifiesto tal situación."

"En este sentido se impone subrayar que cuanto mayor sea la claridad y el sustento fáctico y jurídico que exhiban las argumentaciones de las partes, mayores serán las posibilidades de que los jueces puedan decidir si el gravamen puede únicamente remediarse mediante la declaración de inconstitucionalidad de la norma que lo genera".-

"Como puede apreciarse, el reconocimiento expreso de la potestad del control de constitucionalidad de oficio no significa invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo de su actuación institucional relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de dicho control".-

"... en tal sentido, cabe recalcar la jurisprudencia de esta Corte según la cual la declaración de inconstitucionalidad al importar el desconocimiento de los efectos, para el caso, de una norma dictada por un poder de jerarquía igualmente suprema, constituye un remedio de ultima ratio que debe evitarse de ser posible mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (Fallos:14:425; 147:286). Además, cuando exista la posibilidad de una solución adecuada del litigio, por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa, corresponde prescindir de estas últimas para su resolución (Fallos: 300:1029; 305:1304)".-

"En suma, la revisión judicial en juego, por ser la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal, solo es practicable como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere, de manera que no debe llegarse a una declaración de inconstitucionalidad sino cuando ello es de estricta necesidad...".-

En el caso de autos, entiendo que no se verifican las circunstancias que, en el marco de la doctrina emanada del Más Alto Tribunal, pudiera conducir a una declaración de inconstitucionalidad de oficio. En efecto, no está "palmariamente demostrado" que el precepto normativo sub examine, irroge un perjuicio concreto ni que su aplicación entrañe "...un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución...". Por otra parte, más allá de que en el escrito constitutivo no se introdujo una petición concreta de inconstitucionalidad, lo cierto es que no se efectuó planteo ni desarrollo argumental alguno tendiente a sostener la afectación concreta de una garantía o derecho emanado de la Constitución Nacional, como para que, ante la comprobación de esa afectación, el Tribunal pudiera declarar la inconstitucionalidad de oficio de la norma que la origina (aún cuando tal declaración no hubiera sido pedida en forma específica por el interesado). En otras palabras, la omisión de "planteos argumentales" concretos y la

consiguiente ausencia de prueba que demuestre que la aplicación del precepto en cuestión implica en el caso concreto de estos autos "un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución", obsta decisivamente a la posibilidad de que sea declarada su inconstitucionalidad en el marco de esta causa.- Al respecto, cabe ponderar que, contrariamente a lo sostenido en el memorial por la quejosa, la disposición reglamentaria no implica un exceso al marco previsto por el art. 99 inc.2 de la Constitución Nacional, pues no resulta irrazonable y no puede valorarse como excesivamente formalista el cumplimiento de la exigencia contenida en ella. En efecto, la referida reglamentación, al establecer un plazo prudencial para el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 LCT y exigir un requerimiento fehaciente, no resulta contrapuesta a la directiva legal ni se aparta del espíritu de la norma porque la confección del certificado y la posterior certificación de firmas son diligencias necesarias que pueden llegar a insumir un cierto número de días. Por las razones expuestas y dado que, reitero, el requisito establecido en la norma reglamentaria, a mi juicio, no es irrazonable, no altera el espíritu de la ley, ni contradice la tésis de la norma reglamentada no advierto que configure un exceso de rigorismo formal la desestimación de la sanción ante su falta de cumplimiento. En tales condiciones, propicio rechazar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora en sus agravios (con idéntico criterio, entre otros, esta Sala in re "Rama, Daniel E. c/ADT Security Sevices S.A.S s/despido", SD 97448 del 27/11/09).- Sentado ello, toda vez que la actora no cumplió con el requisito formal impuesto por el art. 3 del decreto 146/2001 a los fines de tornar procedente la multa allí prevista, propongo confirmar el decisorio de grado en cuanto desestima la multa en cuestión.- Se agravia también la parte actora por cuanto a su juicio, a través de la testimonial rendida, se encontraría acreditado el maltrato proferido por su superior jerárquico durante los últimos meses de relación y, en consecuencia solicita que se haga lugar al reclamo por el daño moral y psicológico sufrido.- Aún cuando de la pericia psicológica obrante a fs. 206-I/211 pudiera tenerse por demostrado que el "ataque de pánico" sufrido por la trabajadora a partir de julio de 2007 y hasta marzo del año siguiente pudo encontrarse vinculado "concausalmente" y, en todo caso, de manera "indirecta" con el ambiente laboral y el maltrato alegado, lo cierto es que la actora no presenta incapacidad a nivel psicológico derivada de las circunstancias que alegara en el inicio y que los hallazgos descriptos por la perito psicóloga reconocen como antecedente un cuadro de ansiedad con componentes fóbicos vinculados a la situación de enfermedad de la madre de la Sra. F. y luego se repitieron, con diversa intensidad, a raíz del temor de haber contraído rabia con motivo de la lesión que le provocara una gata.- Dicho informe no permite a mi juicio viabilizar el reclamo en procura de una indemnización extratarifaria especial puesto que, a más de no permitir vincular la dolencia que se denunció como padecida con el trato dispensado por su superior jerárquico durante los meses previos a su traslado a otra sección (poco más de dos meses), lo cierto es que las declaraciones de S. a fs. 177 (impugnado a fs. 195) y de S. a fs. 190 resultan insuficientes para tener por demostrado que la actora fue víctima de hostigamiento u acoso psicológico, por parte del Sr. C. G.- No soslayo que el trato desconsiderado y hasta grosero del que da cuenta S. al señalar que G. levantaba la voz y se dirigía de mal modo hacia la trabajadora no es el adecuado en una comunidad de trabajo, como así tampoco que el hecho de llamar a la perra que residía en el depósito con el nombre de la actora (S.) ha dejado en evidencia la opinión desfavorable que el Sr. G. tenía de la Sra. F. y que ello pudo haberle afectado

moralmente a raíz del descrédito o las burlas a las que tales hechos pudieron dar lugar (nótese que S. reconoció a fs. 190 que "le causó gracia" el nombre dado a la perra), pero no advierto acreditado el daño que se alegó como padecido a nivel psíquico a consecuencia de ello, puesto que la situación se prolongó por poco tiempo (aproximadamente tres días, ver fs. 6 vta./7 de la demanda) y no se ha demostrado que las medidas adoptadas por la demandada resultaran superfluas, tardías o meramente dilatorias.-

No obstante ello, considero que la situación de maltrato padecido por la Sra. F. razonablemente pudo afectarla moralmente y es en razón de dicha situación y teniendo en consideración la responsabilidad que pesa sobre el empleador por los daños padecidos por sus dependientes en razón del trabajo (conf. art. 75 LCT y 1048 Cód Civil) que propicio, en el caso, hacer parcialmente lugar al reclamo formulado y diferir a condena en concepto de indemnización por el daño moral sufrido la suma de \$ 2.600 para cuya determinación he tomado en consideración las aflicciones propias de la situación, su escasa persistencia en el tiempo y los gastos que debió afrontar la reclamante a fin de obtener la asistencia psicológica que le permitió sortear la situación de conflicto.-

Creo necesario recordar aquí que, como lo señalé en reiteradas oportunidades (ver entre otros mi voto en "Aquino, María E. c/Establecimiento Geriátrico Nuestra Señora de Luján SRL y otro s/ despido", SD 99504 del 17/8/11), la violencia laboral en sus múltiples manifestaciones resulta idónea para generar daño y consecuentemente, activar la responsabilidad de los sujetos responsables, aún cuando no reúna determinadas características, ni se revele en facetas o etapas conforme lo sostiene abundante doctrina y jurisprudencia vigente en torno al mobbing o al acoso moral en el trabajo (ver entre muchos otros, LEYMAN H, Mobbing. La persecution au travail, Editions Senil, París, 1993; GONZALEZ DE RIVERA José Luis "El maltrato psicológico. Como defenderse del mobbing y otras formas de acoso" Espasa Práctico, Madrid 2002; ABAJO OLIVARES Francisco Javier, Mobbing. Acoso psicológico en el ámbito laboral. LexisNexis. Buenos Aires, 2004; HIRIGOYEN Marie-France, El acoso moral. El maltrato psicológico en la vida cotidiana. Paidós. Barcelona. 1999; HIRIGOYEN Marie-France, El acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso, Paidós Contextos, Buenos Aires, 2001; PIÑUEL Y ZABALA Iñaki. Mobbing. Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo. Ed.Sal Térrea, Santander, 2001; PIÑUEL Y ZABALA Iñaki. Mobbing.Manual de autoayuda para superar el acoso psicológico en el trabajo. Ed. Aguilar. Buenos Aires. 2003).-

En efecto, aún cuando no se configure un supuesto de "mobbing", la violencia en el ámbito laboral puede manifestarse de muchos modos, por ejemplo, a través de tratos discriminatorios, agresiones físicas, hostigamiento de índole sexual, maltrato organizacional, etc. (ver al respecto conceptualizaciones teóricas elaboradas por TOSELLI, Carlos A- GRASSIS, Pablo M.- FERRER, Juan I., en Violencia en las relaciones laborales, Alveroni Ediciones, Córdoba, 2007) y todos ellos generan la responsabilidad del empleador que no arbitra los múltiples y variados medios a su alcance a fin de prevenirla y/o sancionarla para evitar daños a la integridad psicofísica y moral de sus dependientes.-

Es que como lo expuse en ocasiones anteriores, constituye una obligación específica y contractual del empleador, como así también de toda la comunidad laboral, advertir y denunciar la existencia de situaciones de violencia y analizar sus efectos no sólo para quien la sufre, sino también para su entorno, la empresa y la sociedad en su conjunto. Este ha sido el espíritu que inspiró el dictado de la ley 26485 a nivel nacional -violencia de género-, de las leyes provinciales para la erradicación de la violencia laboral en el

ámbito público (entre ellas, la ley 1225/04 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 13168 de la provincia de Buenos Aires, la ley 9671 de Entre Ríos, la 7232 de la provincia de Tucumán y la ley 12434 de la provincia de Santa Fe) y el que ha inspirado algunos proyectos de ley que se están debatiendo actualmente en el Poder Legislativo.- Por lo demás, la ley 26485 (de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales –BO 14/4/09-) define a la violencia contra las mujeres como "toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica y/o patrimonial, como así también su seguridad personal".- Consecuentemente, a mi juicio, aún cuando los malos tratos proferidos a la trabajadora no hubieren perdurado mucho tiempo ni se hubieren presentado con las características propias de lo que en doctrina se ha calificado como "mobbing" u hostigamiento moral en el trabajo, lo cierto es que se demostró el trato agresivo y desdorado que públicamente le daba el supervisor a cargo (Sr. G.) a la aquí actora, por lo que como lo expuse precedentemente, propongo revocar en tal aspecto la sentencia de grado y hacer lugar al reclamo por daño moral con el alcance antes indicado.- En consecuencia, por todo lo hasta aquí expuesto, teniendo en cuenta la conclusión a la que se arribara con relación al salario percibido por la trabajadora, corresponde diferir a condena los siguientes rubros e importes: a) Indemnización por antigüedad (\$ 2.337 x 10): \$ 23.370; b) Indemnización sustitutiva del preaviso (2 meses incluida la incidencia del SAC): \$ 5.063,50, c) Haberes mayo 2008: \$ 2.337; d) SAC prop. 2008: \$ 973,75; e) vacaciones prop. 2008: \$ 389,50; f) Indemnización art. 15 ley 24013: \$ 28.473,50; g) art. 2 ley 25323: \$ 14236,75; y h) Indemnización por daño moral: \$ 2.600, lo que arroja un total de \$ 77.444.- No corresponde hacer lugar al reclamo de la incidencia del sueldo anual complementario en la base de cálculo de la indemnización prevista en el art. 245 LCT por aplicación de la doctrina sentada en el Plenario "Tulosai" de esta Cámara (conf. arg. Art. 303 CPCCN);; y tampoco se incluyó en la liquidación precedente el importe correspondiente a las vacaciones correspondientes al año 2007 por tratarse de períodos vencidos (conf. arg. Arts. 154 y 162 LCT).- En cuanto a los salarios reclamados por los meses de enero a abril de 2006, la demanda carece de fundamentación adecuada y tampoco esas diferencias han sido objeto de reclamo puntual en el intercambio telegráfico habido entre las partes, por lo que al carecer la inclusión del rubro en la liquidación de fs. 8 vta. de todo respaldo argumental, de conformidad con lo dispuesto en el art. 499 del Código Civil corresponde desestimar tal pretensión.- La suma antes indicada de \$ 77.444 devengará intereses de conformidad con la tasa prevista en el Acta CNAT 2357 del 7/5/02 desde que cada crédito en ella comprendido se ha hecho exigible hasta su efectivo pago.- En atención al nuevo resultado que dejo propuesto, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios practicados en primera instancia y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCCN), por lo que deviene abstracto el tratamiento de las apelaciones deducidas al respecto.- Teniendo en cuenta el modo de resolverse y los mutuos vencimientos parciales y recíprocos obtenidos, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 68 y 71 CPCCN propicio imponer las costas de ambas instancias en un 70% a cargo de la parte demandada y en el 30% restante a cargo de la parte actora. Para así proceder he tomado en consideración que la fijación de las costas no es una cuestión meramente aritmética

sino que para su determinación debe tenerse especialmente en consideración el modo de resolverse, el resultado final obtenido y las razones por las cuales se llegó a litigio, por lo que al haberse admitido la acción en lo que ha sido materia principal de controversia, corresponde imponer las costas de conformidad con la distribución que he dejado propuesta.-

Al respecto, teniendo en cuenta el valor económico del litigio, el mérito y extensión de las tareas desarrolladas, el modo de resolverse y lo dispuesto en la ley 21839, en la ley 24432, en el dec. Ley 16638/57 y en el art. 38 L.O., propicio regular los honorarios de primera instancia correspondientes a la representación y patrocinio de la parte actora, de la parte demandada, los del perito contador y los de la perito psicóloga en las respectivas sumas de \$..., \$..., \$... y \$..., las que se encuentran establecidas a valores del presente pronunciamiento.-

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la ley 21839 corresponde regular los honorarios de segunda instancia correspondientes a la parte actora y a la parte demandada, en las respectivas cantidades de \$... y \$..., las que también se encuentran establecidas a valores del presente.-

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: Por análogos fundamentos adhiero al voto precedente.-

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 CPCCN), el Tribunal RESUELVE:
1) Revocar la sentencia apelada y hacer lugar parcialmente a la demanda condenando a DOLORES GAS S.A. a pagar dentro del tercer día de quedar firme la liquidación del art. 132 de la L.O. a S. S. F. la suma de (\$ 77.444) SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, la que devengará intereses de conformidad con la tasa prevista en el Acta CNAT 2357 del 7/5/02 desde que cada crédito en ella comprendido se ha hecho exigible hasta su efectivo pago, 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia y proceder a su determinación en forma originaria, 3) Declarar las costas de ambas instancias en un 70% a cargo de la parte demandada y en el 30% restante a cargo de la parte actora, 4) Regular los honorarios profesionales en la forma dispuesta en los considerandos respectivos.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.//-

Fdo.: Graciela A. González - Miguel Ángel Maza